

La obsesión del agua

4

Anastasia era una muchacha muy hermosa y atractiva de Marquetalia. Sus curvas turbaban el sueño de los 46 guerrilleros más que el avance de los miles y miles de lanceros, contra quienes combatían desde el 26 de mayo de 1964, fecha del inicio de la más desproporcionada y frustrante operación de las Fuerzas Armadas colombianas. En su honor, Manuel Marulanda Vélez, apodado Tirofijo, bautizó con el nombre de Anastasia a una mina hecha de dinamita y trozos de hierro, introducidos en una barrica de aguardiente. Anastasia cumplió plenamente su misión, exterminando a un pelotón de soldados y haciendo recuperar una docena de fusiles a los guerrilleros. Aquella noche, Tirofijo y sus hombres celebraron el atentado con bailes y canciones revolucionarias, acompañándose con guitarras y maracas (Behar, 1985). “Se vivía, se peleaba, se comía, se dormía, se cantaba, hasta se montaban pequeñas obras de teatro. Éramos felices”, recordó Jacobo Arenas, que se convertiría en secretario de las FARC antes de Tirofijo, y moriría de un infarto a la edad de 74 años, en 1990. Arenas, que había manifestado en más de una ocasión su deseo de “morir en combate, abrazado al cañón caliente de una submetralladora”, murió, pues, de muerte natural, como se decía en Colombia antes de que lo natural fuera acabar con una bala en el cuerpo.

El conflicto había empezado en el valle de Marquetalia, en la Cordillera Oriental, donde se habían refugiado cientos de campesinos escapando de las zonas más castigadas por la violencia. Desconfiados ante la pacificación propuesta, se organizaron los primeros núcleos de resistencia para

defender sus propiedades. Apenas se tuvo noticia de ello en Bogotá, algunos diputados conservadores denunciaron el nacimiento de “repúblicas independientes” dentro del territorio nacional. La cúpula del ejército colombiano y los instructores norteamericanos eligieron Marquetalia para experimentar en el país la Latin American Security Operation (Operación Laso). El ataque comenzó con bombas de napalm y continuó con el avance de los batallones de la contraguerrilla, de reciente constitución. El grupo de rebeldes no se atemorizó. Divididos en núcleos de cinco hombres, y aprovechando su perfecto conocimiento de la región, Tirofijo y los suyos hicieron saltar los engranajes de la poderosa máquina de guerra, con emboscadas y ataques por sorpresa. Al mismo tiempo que combatían, enviaron llamadas de ayuda incluso a las capitales europeas, donde se ganaron la solidaridad pública de Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir.

El ataque de Marquetalia duró casi un año. La noticia de la participación norteamericana en la operación contribuyó a desatar una oleada de simpatía nacionalista hacia Tirofijo y los suyos. Al núcleo inicial se unieron los campesinos revolucionarios de otras zonas, y también intelectuales, como el mismo Arenas, enviado desde Bogotá como comisario político del Partido Comunista. A pesar de los combates en curso, los rebeldes hallaron ocasión para celebrar, el 20 de julio de 1964, una asamblea general que votó un programa agrario para contraponerlo “al de mentiras de la burguesía”.

Cuando Tirofijo y los suyos se retiraron, utilizando un sendero secreto escondido entre el monte, que desembocaba en la otra zona liberada de Riochiquito, los generales finalmente pudieron cantar victoria. En realidad fue precisamente a raíz de aquel episodio de resistencia armada en un pequeño altiplano de la Cordillera Central, sembrado de café, maíz y cacao, cuando nació la guerrilla comunista en Colombia. A fuerza de hablar del “peligro comunista”, el Estado colombiano había conseguido convertirlo en realidad.

Así nació en Colombia otro tipo de violencia que fue llamada irónicamente “tardía”. La otra, la de los liberales y conservadores, había concluido formalmente en 1958, con la elección del primer presidente del Frente Nacional, Alberto Lleras. El nuevo gobierno se situó desde el primer momento bajo el ala, que suponía protectora, de Estados Unidos y, sobre todo, del Banco Mundial, que favoreció la modernización del país, financiando la construcción, entre otras cosas, del ferrocarril entre Bogotá y Santa Marta, y gran parte de la red de carreteras. Convertida en la cuarta beneficiaria mundial de sus préstamos, Colombia conquistó el título de “hija

predilecta” del organismo internacional, sometiéndose a todas sus imposiciones y pagando regularmente las deudas. Para conquistar la confianza de Estados Unidos, el gobierno del Frente Nacional se distanció incluso de la Iglesia, suscribiendo un programa de control de natalidad que, en menos de 20 años, redujo drásticamente el crecimiento demográfico, pasando de siete a tres hijos por familia.

Otros requerimientos del Banco Mundial, como el de un cambio capitalista en la agricultura, que exigía una despoblación relativa de las zonas rurales (en abierta contradicción con una verdadera reforma agraria) fueron cumplidos por la violencia misma. La idea del economista del Banco Mundial Lauchlin Currie, consejero de cinco presidentes de la república colombiana, de combatir la economía de subsistencia para dotar al país de grandes haciendas mecanizadas, fue realizado a sangre (*Desarrollo económico*, 1968). Según el investigador Héctor Mondragón, desde entonces en Colombia “no sólo hay desplazados porque hay guerra sino especialmente hay guerra para que haya desplazados”.

Entre 1951 y 1964 se duplicó la población urbana. La mayoría de los nueve millones de personas que vivían en las ciudades quedó reducida a la indigencia, a la pequeña delincuencia, o se habituaron a una existencia de expedientes y a los trabajos precarios ligados a la llamada “economía informal”. A los gobernantes del Frente Nacional no les quitó el sueño el progresivo aumento de pobres y oprimidos dentro de una población extenuada ya por la guerra civil. Liberales y conservadores se felicitaban ante las alabanzas de los organismos internacionales y de los países ricos, que podían meter mano en los recursos del país como en ninguna otra parte del mundo. No solamente fueron perseguidos los sindicatos, como la Unión Sindical Obrera del sector petrolero (USO), sino también los políticos mínimamente nacionalistas. A inicios de los años sesenta el gobierno norteamericano impuso la dimisión del ministro de Recursos Energéticos, culpable de haber intentado favorecer a la compañía petrolera estatal, Ecopetrol, y limitar los beneficios de las multinacionales del sector.

La maquinaria estatal fue puesta al servicio, y a veces en las manos, de las asociaciones de empresarios: la ANDI diseñaba la política industrial, Fedegan decidía la agrícola, y era la potentísima Federación de Cafeteros, considerada un “Estado dentro del Estado”, la que imponía las leyes del comercio exterior. Para la mayoría de los colombianos no existía el Estado, o era solamente símbolo de corrupción y, sobre todo en las zonas rurales, significaba exclusivamente la “ley”, el ejército y la policía.

Con el Frente Nacional se instauró en el país la llamada “democracia restringida”, que mezclaba elementos de democracia formal con

mecanismos típicos de los regímenes autoritarios, como la aplicación casi permanente del estado de excepción para combatir las luchas sociales. Tal situación estaba abocada a la violencia. La misma amnistía ofrecida a veces por el gobierno a los llamados bandoleros se demostró una trampa. La primera víctima fue el más famoso guerrillero, Guadalupe Salcedo, muerto en una calle de Bogotá en junio de 1957. Por su parte, Álvaro Parra, el “vice” de Salcedo, dos meses antes de ser asesinado por un “pájaro” del Valle en una taberna de Villavicencio, dijo al mediador del gobierno que lo había convencido a dejar las armas: “Antes de un año todos vamos a estar muertos, nos van a matar uno por uno”. Muchos guerrilleros que sobrevivieron a la matanza se hicieron bandidos. A ellos se unieron cientos de adolescentes, sedientos de venganza. Entre 1958 y 1965, hombres como Peligro, Sangrenegra, Desquite, Chispas, Efraín González, Tarzán y Capitán Venganza, formaron más de cien bandas con el único programa de “destruir por destruir”. Algunas se pusieron al servicio de latifundistas liberales. Otras asumieron un carácter ocasionalmente social, aunque mostrándose sordas e incluso hostiles ante cualquier proyecto político.

Los bandoleros continuaron en todo caso sintiéndose defraudados por la gente “de bien”. En los Llanos se dejaron convencer y apoyaron a Alfonso López Michelsen, fundador del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), surgido en abierta oposición al Frente Nacional. Con el lema “Pasajeros de la revolución por favor seguir a bordo”, López Michelsen se proclamó heredero de Gaitán, declarándose dispuesto a colaborar con el Partido Comunista y a colocar como primer punto de su programa la reforma agraria. Bastó que tras las elecciones de 1966 el Frente Nacional le ofreciera un ministerio para olvidar sus promesas y los pactos firmados. El líder del MRL atacó a los comunistas. “No permitiremos que el descontento y la frustración que el Frente Nacional está incubando se refugien bajo la hoz y el martillo”. Los bandoleros volvieron a ser un peligro de orden público. El general encargado en darles caza declaró que “contra bandoleros y seres rebeldes y desnaturalizados, la única solución está en el fuego eficaz de las armas”.¹ Desde entonces se hizo habitual en los centros de poder de Bogotá asociar a los comunistas con los bandoleros, y viceversa, olvidando las causas sociales y económicas de la violencia. Para reducir el progresivo apoyo que unos y otros conseguían en las zonas rurales hubiera sido necesario y también suficiente realizar la reforma agraria.

El triunfo de la revolución cubana de 1959, y la distribución de la tierra decidida por los castristas suscitó gran entusiasmo entre los pue-

¹. *Revista del Ejército*, 24 de marzo de 1966.

blos latinoamericanos. La reunión de jefes de Estado celebrada posteriormente en Punta del Este, concluyó con el compromiso de “impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de reforma agraria integral orientada a la efectiva transformación de las estructuras y sistemas injustos de tenencia y explotación de la tierra”. En el Congreso colombiano fueron presentados tres proyectos de reforma agraria, pero todos ellos se demostraron “variaciones alrededor de la nada”. Algunos políticos opinaban que no debía ser distribuida la tierra sino la gente. Al final se realizó una reforma que benefició a los propietarios ricos y a las multinacionales norteamericanas que les vendían la maquinaria agrícola. Los riesgos de una situación explosiva en el campo eran, en todo caso, evidentes. El presidente Carlos Lleras Restrepo explicó en 1967, durante una cumbre latinoamericana, las razones de conveniencia política de la reforma agraria:

Nuestros campesinos, en su mayoría, son hombres que no tienen nada que perder y sobre esa masa que no tiene nada que perder, sobre esa masa inorgánica, ignorante, es donde la infiltración revolucionaria puede cosechar sus mayores frutos... Entonces, aunque sólo sea por egoísmo, quienes son propietarios de tierras ¿no deben detenerse a meditar en los peligros que encierra la proliferación de esta vasta, de esta inmensa masa desamparada que constituye el campesino pobre colombiano? ¿O es que acaso se cree que con simples medidas militares puede controlarse una situación de esa clase?

Su buen sentido no modificó la mentalidad de la oligarquía colombiana que, con tal de mantener sus privilegios, prefirió entregarse a las medidas militares. Éstas pronto demostraron que no eran tan simples.

Según perdía la guerra su carácter de conflicto bipartidista y se convertía en una de tantas batallas de la guerra fría, las Fuerzas Armadas colombianas aumentaban su peso en el país. Antes del 9 de abril de 1948 contaban solamente con 8.000 hombres. Un año más tarde duplicaron sus efectivos. Mientras los guerrilleros mantuvieron lazos con el Partido Liberal, el ejército aplicó en muchas regiones un cómodo acuerdo basado en el “vivir y dejar vivir”. En todo caso, los aparatos del Estado seguían a veces estrategias y métodos contradictorios. Podía suceder a veces que la policía no advirtiera al ejército que se estaba produciendo una concentración de guerrilleros dispuestos a tenderles una emboscada. En otras ocasiones era el ejército quien tomaba el camino más largo cuando debía socorrer a un puesto de policía atacado por la guerrilla, y llegaba a tiempo sólo para enterrar a los muertos.

La reestructuración del ejército comenzó en 1951, cuando el presidente conservador Laureano Gómez, para obtener el perdón de Estados Unidos por sus pasadas simpatías hacia la Falange franquista, envió un batallón a la guerra de Corea bajo las órdenes del general Alberto Ruiz Novoa. Colombia fue el único país latinoamericano que participó en aquella contienda lejana “contra el comunismo”. Fue también uno de los primeros en firmar en 1952 un acuerdo de mutua defensa con Estados Unidos, y el primero en poner en marcha cursos de entrenamiento específicos de contraguerrilla. Un episodio decisivo en la reorganización de las Fuerzas Armadas colombianas tuvo lugar en 1962, cuando Ruiz Novoa fue nombrado ministro de Defensa. Entonces llegaron a las academias colombianas los primeros instructores militares norteamericanos, y fueron enviados los primeros oficiales colombianos a la Escuela de las Américas de Panamá. Había mucho que aprender.

La tensión Este-Oeste impuso un cambio de estrategia “en el patio trasero de Estados Unidos” cuando triunfó la revolución cubana. En un discurso de 1962, dirigido a los oficiales de la Academia Militar de West Point, el nuevo presidente de Estados Unidos, John Kennedy, dijo: “La subversión es otro tipo de guerra, nuevo en su intensidad aunque de antiguo origen... Cuando debemos contrarrestar ese tipo de guerra, estamos obligados a emplear una nueva estrategia, una fuerza militar diferente”. Eran las bases de la llamada “guerra de baja intensidad” (Jaramillo, s.f.). Según el ex ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Alfredo Vázquez, la administración Kennedy se esforzó mucho en transformar los ejércitos regulares en brigadas contrainsurgentes.

El Pentágono distribuyó en América Latina manuales que asignaban a los ejércitos tareas “militares, paramilitares, políticas, económicas y psicológicas” con el objetivo de combatir al “enemigo interno” que se hallaba infiltrado en amplios sectores de la sociedad. Los manuales establecían los criterios para la formación de los grupos de civiles que debían flanquear a los militares. Después de visitar Colombia en 1962, el director de la Escuela de Guerra de Fort Bragg, general William Yarborough (McClintock, s.f.), manifestó que dichos grupos deberían desempeñar funciones de “contrainteligencia y contrapropaganda y, si fuera necesario, ejecutar actividades paramilitares de sabotaje o terrorismo contra conocidos defensores del comunismo”. En el mismo documento, el citado general sugería la realización en Colombia de “un programa intensivo de registro de civiles, con fotografías y huellas dactilares”, y proponía que el personal del ejército y de la policía se especializara en “interrogatorios con uso de sodio, pentotal o de la máquina de la verdad”. Era preciso impedir a los

subversivos “moverse entre el pueblo como pez en el agua”, tal como indicaba en sus escritos Mao Tse-tung. Pronto se pasó de las palabras a los hechos. Estados Unidos comenzó a proporcionar cada vez más asistencia bélica y armas a Colombia, hasta hacerla su “partner” privilegiado en el continente latinoamericano. Además de visitar el país, Kennedy envió cientos de jóvenes de los Cuerpos de Paz para que hicieran propaganda de los valores occidentales y contrarrestaran la simpatía popular hacia la revolución cubana.

Los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional fueron propuestos a los militares colombianos en un momento en que el ejército atravesaba una fase de reflexión. La Escuela Superior de Guerra de Bogotá había publicado en 1960 un documento titulado “Una franca apreciación de la situación de orden público en el país y de la intervención del comunismo en las zonas de violencia”, en el que se admitía que “las acciones militares con tropas regulares contra los bandoleros le han restado prestigio a las Fuerzas Armadas y contribuyeron a aumentar las fuerzas de bandoleros”. El general Ruiz Novoa afirmó en 1961 que era absolutamente necesario destruir el verdadero estado de “complicidad colectiva” disfrutado por los elementos “antisociales”. La reorganización del ejército llevó a la formación de la primera brigada móvil de contraaguerrilla, compuesta por grupos ágiles, organizados según el esquema de las unidades guerrilleras. Un nuevo organismo de policía, el DAS, promovió la infiltración en los grupos bandoleros, y la utilización masiva de informantes, elegidos preferentemente entre ex bandidos que se habían beneficiado de la amnistía. El ejército trató de equiparse para la lucha antisubversiva también a nivel teórico. En 1963 se imprimió el libro *La guerra moderna*, que centraba su análisis en la experiencia contraaguerrillera de Vietnam y Argelia y estaba dirigido a los oficiales.

Ruiz Novoa estimuló el compromiso cívico-social de las Fuerzas Armadas que, en las regiones de mayor conflicto, pusieron en marcha cursos de alfabetización, abrieron centros médicos ambulatorios, construyeron puentes y carreteras, siempre con el objetivo de “ganar los corazones y las mentes del pueblo”. La actividad de las brigadas “cívico-militares” no duró mucho, además de que siempre estuvo acompañada por la “guerra psicológica”, que era más clásica. En las montañas de Quindío, cerca de Armenia, fueron lanzados pasquines para ayudar a los campesinos a diferenciar a los militares de los guerrilleros. “El ejército emplea un trato correcto con los ciudadanos, en ningún momento emplea palabras soeces ni mal trato... visten uniformes iguales... y no usan zapatos de caucho sino botas de cuero”, podía leerse.

Una de las primeras medidas adoptadas consistió en la catalogación de todos los trabajadores fijos. Con ello resultaban sospechosos todos los trabajadores temporales o los desempleados. En una región llegaron a prohibir la ruana, porque era “típico disfraz de los bandoleros”. En otra ordenaron a los campesinos encerrar en casa a los perros porque, según afirmaba un alto oficial en el periódico *El Espectador*, “las experiencias en la región demuestran que el perro es un elemento amaestrado para anunciar únicamente la presencia de las tropas y no de los bandoleros”. En todo caso, el meollo de la nueva estrategia militar fue la creación de núcleos de “campesinos honrados”, que tomaron el nombre de “autodefensa campesina”, como los promovidos en décadas anteriores por los liberales rebeldes y por los comunistas. En 1961, el gobierno permitió a dichos grupos “la adquisición de armas convenientemente matriculadas para la defensa de sus vidas y bienes”. Los militares de la región cafetera de Caldas empezaron a distribuir, durante ese mismo año, fusiles y pistolas a los propietarios de tierras recomendados por las autoridades. Al año siguiente, las armas fueron distribuidas directamente en las sedes de la federación de cafeteros. En el Tolima se ordenó llevar armas a los conductores de los medios de transporte públicos.

La puesta en práctica en Colombia de la Doctrina de Seguridad Nacional cosechó pronto el fracaso. Aunque fueron conquistados “el corazón y la mente” de una pequeña parte de la población “honorable” y digna de confianza, la mayor parte se sintió impulsada a identificarse con el enemigo y a adherirse a sus grupos. La batalla de Marquetalia representó su derrota más sonada. Los comunistas colombianos no tenían por entonces intención belicosa alguna. En 1958 Tirofijo escribió en el periódico *La Tribuna* de Ibagué: “Como patriotas no estamos interesados en la lucha armada y deseamos colaborar cuanto podamos en la tarea de pacificación”. Su estructura militar en algunos territorios aislados de las cordilleras era debida solamente a la persecución de los “pájaros”. Quien realmente desencadenó la guerra contra la “república independiente” de Marquetalia fue Álvaro Gómez, hijo de Laureano Gómez, que había sido uno de los presidentes más reaccionarios de la historia colombiana. La Operación Laso sólo consiguió diseminar a los guerrilleros por otras regiones del país.

Los militares hicieron algunos intentos de emanciparse del papel de defensores violentos de un Estado injusto. En ello se destacó general Ruiz Novoa que escribió en 1962: “La defensa contra el comunismo no reside esencialmente en la fuerza de las armas; ella se encuentra en la eliminación de las desigualdades sociales siguiendo las normas democráticas y cristianas” (Valencia, 2002). El antiguo combatiente de Corea opinaba

que el ejército debería comprender sus orígenes sociales para combatir más eficazmente a la guerrilla. Cuando Ruiz Novoa propuso en 1965 un plan de estudios en las academias militares que preveía la enseñanza de disciplinas económicas y sociales impartidas por profesores progresistas, fue obligado a dimitir por el Frente Nacional, con la excusa de un presunto “primado de la sociedad civil”. La misma suerte sufriría diez años más tarde el general Álvaro Valencia. También a él le resultó fatal la decisión de organizar ciclos de conferencias sobre las causas sociales del conflicto en la Universidad Militar. La elite bipartidista lo acusó en primera instancia de intentar un golpe, y después lo obligó a dimitir. Los pocos oficiales progresistas que se reunieron en los años setenta bajo el nombre Estrella Dorada, fueron identificados y expulsados del ejército, tal como le sucedió al famoso general José Joaquín Matallana, forzado a dimitir en 1976 por haber criticado la excesiva sumisión de Bogotá hacia los intereses de Estados Unidos. El sistema político no soportaba intrusiones. Sólo estaba dispuesto a distribuir a la cúpula de las Fuerzas Armadas una tajada importante de riqueza y privilegios, permitiéndoles, mediante leyes dictadas al caso, ponerse al servicio de las empresas privadas y de las multinacionales. La British Petroleum, por ejemplo, se comprometió a pagar un “impuesto de guerra” de 1,25 dólares por barril de petróleo extraído, resignándose a repartir una especie de comisión a los oficiales establecidos en las zonas de sus pozos y por donde transcurrían sus oleoductos. Por supuesto, el ejército tenía mano libre en la llamada gestión del orden público y en la defensa de los intereses del gran capital.²

Con esa prerrogativa extendió por el territorio nacional la “guerra no convencional” que, utilizando sicarios de forma masiva, tenía como objetivo la “eliminación selectiva del enemigo (líderes políticos, sindicales y populares), la masacre colectiva (contra quienes apoyan la subversión y se niegan a brindar información a la inteligencia militar), y el genocidio (contra las zonas y regiones en las que exista un reconocimiento formal de la influencia del movimiento insurgente)” (Medina Gallego, 1990). Los gobiernos reforzaron su legislación de guerra proclamando continuos estados de asedio o de emergencia, que conllevaban la suspensión de los derechos constitucionales y la transferencia de amplios poderes judiciales a las Fuerzas Armadas. En 1965 fue promulgado el Decreto 3398 que contemplaba “la organización y previsión de empleo de todos los habitantes y recursos del país, en tiempo de paz, para garantizar la independencia nacional y la estabilidad de las instituciones”. Tres años más tarde fue vota-

2. *The Economist*, 19 de julio de 1997.

da la Ley 48 que autorizaba al gobierno a “crear patrullas civiles” y proveerlas de “armas de fuego para el uso privativo de las Fuerzas Armadas”. Era el fundamento legal del paramilitarismo en Colombia. “Los campesinos de la zona permanecían en sus fincas de lunes a viernes trabajando y los sábados y domingos se concentraban en unidades militares donde recibían cursos de inteligencia y contrainteligencia”, recordó Henry Pérez, jefe paramilitar en el Magdalena Medio.³

La cúpula de las Fuerzas Armadas colombianas puso en circulación varios manuales, la mayoría *top secret*, sobre la organización de la población civil. Según *el Reglamento de combate para la contraguerrilla*, de 1969,

las juntas de autodefensa conforman una organización de tipo militar que se hace con el personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos de guerrilleros en coordinación con tropas en acciones de combate.

Las unidades militares debían, de acuerdo con el reglamento, suministrar el armamento necesario en casos específicos, incluso gratuitamente. Otro documento indicaba la necesidad de poner a prueba la lealtad de los ciudadanos. “Los que no pasan la prueba se ponen en una lista negra. Los que no dejan clara su lealtad se ponen en una lista gris. Ambos deben recibir amenazas anónimas, haciéndoles creer que están comprometidos y que deben abandonar la región”. Si en los manuales norteamericanos eran los comunistas los enemigos a combatir, en los colombianos eran todos los protagonistas de las luchas sociales. Según el general Luis Carlos Camacho, los sindicatos no eran sino el “brazo político de la subversión”, mientras que para el general Fernando Landazábal (1980), no había error mayor “que dedicar todo el esfuerzo al combate y represión de las organizaciones armadas del enemigo, dejando en plena capacidad de ejercicio libre de su acción a la dirección política del movimiento”.

Sin embargo, frenar la protesta social era un objetivo casi imposible de alcanzar. Los partidos del Frente Nacional continuaron evitando cualquier reforma, concibiendo la dinámica electoral como meros ejercicios de democracia vacía. Un colosal fraude electoral le arrebató en 1970 la victoria al general Rojas Pinilla quien, a la cabeza del movimiento Alianza Nacional Popular (Anapo), se enfrentó al candidato Misael Pastrana, del Frente Nacional. La desilusión popular hizo aumentar el abstencionismo

3. *Semana*, 16 de abril de 1991.

en las elecciones siguientes, que pasó del 50% de ese año al 60% de las presidenciales de 1978, con puntas del 88% en Bogotá. Colombia demostraba ser una “democracia sin pueblo”, mientras continuaba vendiéndose la imagen de un país moderno, rico y democrático, con un pueblo a quien se impedía tener una representación política o hasta protestar, so pena de ser acusado de subversión. Y la subversión creció, inevitablemente. En varias regiones del país se crearon organizaciones armadas de orientación guevarista, entre las que se destacaron, además de las FARC, el filocubano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el EPL, de orientación maoísta. Existía la profunda convicción en los sectores progresistas de que después de Cuba le iba a tocar el turno a Colombia.

Una parte amplia de la población no podía sino sentir simpatía hacia quienes la gran prensa llamaba habitualmente bandoleros. El paternalismo bipartidista y la guerra civil comenzada el 9 de abril de 1948 había debilitado notablemente otras formas organizadas del movimiento popular. También se habían agravado las condiciones de vida, ya miserables, de los colombianos. La desesperación originó protestas de todo tipo, a menudo espontáneas. Los campesinos utilizaron los espacios abiertos por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), constituida por el presidente del Frente Nacional más iluminado de su época, Lleras Restrepo, para mantener su protesta de moderada reforma agraria. Pero cuando ANUC se emancipó de la tutela gubernamental y organizó manifestaciones y ocupaciones de fincas abandonadas, sobre todo a lo largo de la costa atlántica, los latifundistas soltaron las bandas de pájaros contra sus dirigentes. El movimiento campesino se vio debilitado, asimismo, por las luchas internas desde la mitad de los años setenta, entre un ala moderada y gobiernista, un sector influenciado por el Partido Comunista, y otro todavía más radical controlado por los maoístas.

En esta fase emergieron como vanguardia social los movimientos cívicos urbanos, estimulados involuntariamente por las juntas de acción municipal, creadas por el gobierno para involucrar a la población en los proyectos de mejora de los servicios públicos. También en este caso, las juntas comenzaron muy pronto a organizar manifestaciones para protestar contra los aumentos de las tarifas o para reclamar servicios básicos, como agua corriente, alcantarillado y electrificación. Muchos militantes católicos decidieron trabajar en el nuevo movimiento. El gobierno osciló entre compromisos formales de colaboración y la represión más brutal, sistemáticamente anunciada por acusaciones de infiltraciones guerrilleras.

En 1985 eran más de 32.000 las organizaciones cívicas de ciudad o de barrio, y tenían cinco millones de afiliados, con una consistencia ja-

más alcanzada por el movimiento sindical, numérica y políticamente débil en Colombia. La bajísima sindicalización, que rondaba el 5% de la fuerza laboral total, era debida, por una parte, a la alta incidencia de la economía informal, pero también a la implacable represión realizada mediante la criminalización constante de las protestas y por una cadena casi habitual de detenciones y asesinatos de dirigentes sindicales.

El movimiento indígena encontró dificultades parecidas para conseguir su propio derecho a la tierra y a la cultura. De los 150 grupos étnicos existentes en el país, que representaban a medio millón de personas, el más fuerte y organizado era el del pueblo nasa (páez), en el departamento andino de Cauca. Estimulados por la ANUC local, los indígenas fundaron en 1971 el Consejo Regional Indígena de Cauca (CRIC), que impulsó la ocupación de decenas de miles de hectáreas de tierra, manteniendo su autonomía frente a los grupos revolucionarios. “La politización debe llegar como resultado de un proceso en el cual no se pueden saltar etapas y en el que el trabajo paciente y serio debe ser la norma fundamental”, opinaban los dirigentes del CRIC. La experiencia del pueblo Páez animó a los otros grupos indígenas. En 1980 fue creada la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), con el lema: “Unidad, tierra, cultura y autonomía”. Fue una decisión dura. Algunos indígenas fueron perseguidos por los guerrilleros, y muchos más por los “pájaros” al servicio de los latifundistas. El CRIC creó a su vez un grupo armado para defender a su pueblo, que tomó el nombre de un antiguo dirigente, Quintín Lame.

La criminalización de todo movimiento de protesta determinó el refuerzo de las organizaciones ilegales, armadas y clandestinas. El ELN hizo su primera aparición pública a comienzos de 1965, cuando 27 hombres armados de fusiles de caza realizaron la clásica “toma guerrillera” de un pueblo de Santander, al noreste del país. Muchos de ellos habían sido entrenados en Cuba. Creían que sería suficiente prender una cerilla para incendiar la pradera. “Un gran problema de nuestra práctica fue la absolutización de la lucha armada... Lo que hicimos fue casarnos con ella y no la soltamos por ningún lado”, recordará más tarde un dirigente del ELN. El grupo se hizo muy popular cuando ingresó en él Camilo Torres, el primer sacerdote que rompió con la tradición que promovía una Iglesia anclada en las posiciones políticas más reaccionarias. Torres se internó en las montañas de Santander para meterse en las filas guerrilleras, y morir durante su primer combate, el 15 de febrero de 1966. La figura del cura guerrillero llevó hasta el ELN a muchos jóvenes, e incluso a otros religiosos, tanto sacerdotes como monjas, que compartían su idea de que “el deber

de todo cristiano es ser revolucionario y el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”.

Después de la muerte de Camilo Torres comenzaron las divisiones dentro del ELN. “La discusión se daba en el hostil ambiente de la selva, muy agresivo y bajo la constante amenaza de la muerte, representada en la fiebre amarilla, el hambre, la culebra, las múltiples penalidades, el paludismo y la actitud del hombre, que se va convirtiendo también en hostil y agresivo”, recordó un ex guerrillero. Comenzó un periodo trágico de juicios sumarios, concluidos a menudo ante los pelotones de ejecución. La consigna de Dantón, “Audacia, siempre audacia”, se convirtió en el lema de la tendencia militarista que superó a la que daba más importancia al trabajo de arraigo entre la gente. La derrota del ELN tuvo lugar en 1973, cuando 30.000 soldados rodearon y diezmaron el grueso de sus hombres con la Operación Anorí. A diferencia de lo sucedido en Marquetalia en 1964, el ejército no avanzó de manera compacta, para no exponerse a las emboscadas de los rebeldes, sino dividido en pequeñas unidades. Después de varias semanas de combate, fueron muertos o hechos prisioneros más de 200 guerrilleros. En diferentes fases desmantelaron luego las redes urbanas de los elenos, los cuales en todo caso consiguieron superar la tortura y politizar los procesos en las salas de los tribunales militares, consiguiendo ganar la solidaridad de intelectuales colombianos como Gabriel García Márquez.

El EPL, por su parte, intentó promover al occidente del país la “guerra popular prolongada”, según el modelo maoísta. Sus militantes influyeron en el profesorado, en las juntas de acción comunal y, sobre todo, entre los braceros de las bananeras, consiguiendo ascendiente en los sindicatos de las regiones de Córdoba y Urabá. En 1967 la organización se concentró en las zonas rurales para construir “embriones de poder alternativo”. El comandante Ernesto Rojas refirió que “la gente se organizaba en cada vereda y celebraba reuniones cada ocho días en las que hasta los niños con edades mínimas hablaban sobre sus propios problemas... Cuando no había combates estábamos con la gente ayudándola en sus labores y de noche enseñábamos a leer y escribir en las escuelas que se conformaron”. Los guerrilleros de orientación maoísta sufrieron, por lo demás, una despiadada persecución militar, facilitada por sus propias divisiones internas, a menudo resueltas a tiros.

También las FARC sufrieron duros reveses militares, aunque nunca se vieron en riesgo de desaparecer. El buen sentido campesino de sus jefes, comenzando por Tirofijo, les indujo a hacerse fuertes en las zonas más aisladas del territorio colombiano donde, ejerciendo funciones típicas de una autoridad estatal, lograron ganar la confianza de la gente por su ca-

pacidad de imponer el orden y el respeto a las leyes más básicas de convivencia. En algunos casos obtuvieron incluso la gratitud de los propietarios de los campos, por su función de guardias rurales. En los primeros 15 años de vida de la organización, los hombres de Tirofijo evitaron provocar al ejército, dentro de lo posible, siguiendo la línea del Partido Comunista que no consideraba el enfrentamiento como “la principal forma de lucha”.

Precisamente a causa de esta renuncia, algunos jóvenes dirigentes provocaron una pequeña escisión, de la que surgió el M-19. “Se necesitaba meterle masas al movimiento armado y meterle fuerza al movimiento de masas”, recordó un comandante del Eme, como se llamó enseguida al grupo (Villamizar, s.f.). Se llevaron a cabo una serie de hurtos para dotarse de armas y financiar el periódico *Mayorías*. “Las grandes peleas que se dieron inicialmente fueron sobre si cantábamos el himno nacional o la Internacional”, contaron sus dirigentes. El nombre M-19 se eligió para recordar el fraude electoral que el 19 de abril de 1970 había robado la victoria a la Anapo del general Rojas Pinilla. Aquel fraude los había persuadido de la imposibilidad de una vía democrática. “Es imposible pensar en una solución democrática en Colombia si no hay movilización de masas y triunfo militar” afirmaba Álvaro Fayad, uno de los líderes del nuevo movimiento, que fue asimismo el responsable de la primera aparición pública del Eme.

En el año 1974 que finalizaba el acuerdo del Frente Nacional entre los partidos liberal y conservador. Pero también era un año marcado por un fuerte crecimiento del movimiento popular, con huelgas, ocupación de tierras y manifestaciones ciudadanas, y por un cierto despertar del movimiento guerrillero. Los jóvenes fundadores del nuevo grupo armado diseñaron un singular lanzamiento promocional. El responsable de las páginas publicitarias de *El Tiempo* no sospechó nada cuando un par de hombres le pidieron publicar durante seis días consecutivos varios anuncios que promovían un nuevo producto. “Arriba el M-19”, apareció en el primero, que iba asimismo acompañado de un extraño logotipo en forma de corbata. Después sucedieron otros, como “¿Parásitos, gusanos? Espera el M-19”; “Decaimiento, pérdida de memoria: espera el M-19”; y “¿Falta de energía, inactividad? Espera el M-19”, hasta el triunfante “Hoy llega el M-19”. Y el M-19, finalmente, llegó.

A las cinco de la tarde de un frío miércoles de enero, Álvaro Fayad rompió la urna de cristal que contenía la espada del Libertador en el Museo de la Quinta de Bolívar, que había sido su residencia en el corazón de La Candelaria, el barrio colonial de Bogotá, a pocas cuadras del palacio presidencial. “Queríamos hacer un movimiento para el país, para la gente

común y corriente, para la gente que quisiera cambiar este país... Ya no era simplemente retomar toda la historia de Bolívar, era recomenzar su lucha... por eso escogimos la espada”, recordó Fayad. Fue una acción perfecta, realizada por supuestos turistas que esperaron el cierre del museo para actuar. En una hoja puesta sobre el lecho del caudillo, dejaron escrito: “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”. Era una espada de 85 centímetros de largo, con una empuñadura de oro y plata y el escudo real de la corona francesa, que había acompañado a Bolívar desde sus quince años hasta la muerte. El Eme prometió restituirla cuando Colombia hubiera conquistado “justicia e independencia”.

Desde aquel momento, los guerrilleros del M-19, influidos por la experiencia de los Tupamaros uruguayos, comenzaron a realizar acciones a lo Robin Hood, con incursiones de hombres encapuchados en las universidades, interrupciones de programas televisivos con lectura de comunicados, y asaltos a los camiones de víveres y juguetes, botín que distribuían después en los barrios más pobres de las ciudades. Posteriormente pasaron a acciones más llamativas, como secuestros de empresarios, extranjeros o colombianos, para financiarse y apoyar las luchas sindicales.

Cuando subió a la presidencia Julio César Turbay, el Eme no era el grupo más fuerte, pero sí el más audaz. “El mismo día de mi posesión encontré sobre mi escritorio un boletín en que dicho movimiento, antes de comenzar mi gobierno, se colocaba irrazonablemente en pie de batalla contra la nueva administración”, recordó Turbay. El nuevo presidente puso como primer punto de su programa de gobierno la lucha contra los grupos armados, dotando a los militares de los “medios más eficaces” para combatirlo. En septiembre de 1978 Turbay firmó el Estatuto de Seguridad, que aumentaba las penas por los delitos políticos y autorizaba a los militares a retener a cualquier persona durante diez días antes de pasarla a disposición judicial. La represión se generalizó. Durante el primer año del gobierno Turbay, según un documento de Defensa, fueron detenidas más de 60.000 personas, buena parte de las cuales fue sometida a torturas y procesada por tribunales militares. “Se implantó en Colombia por primera vez la tortura como mecanismo institucionalizado de interrogatorio”, afirmó el periodista Daniel Samper, hermano del futuro presidente liberal Ernesto Samper.⁴

El ministro de Defensa de Turbay, general Luis Carlos Camacho, afirmó en diciembre de 1978 que “todo ciudadano debe armarse como

4. El juicio de Daniel Samper sobre el carácter sistemático de la tortura, está en *Tras los pasos perdidos*, Ediciones Ncos, 1995.

pueda" para defenderse de la oleada de inseguridad existente en el país. El Eme le tomó la palabra poco después.

Una pareja de militantes llamados Rafael Arteaga y Esther Morón, en modo alguno sospechosos, alquiló una casa en un barrio residencial de Bogotá y desde ella, por espacio de dos meses, decenas de militantes excavaron un túnel de 80 metros de largo, que desembocó en la armería del cuartel Cantón Norte. Mientras Turbay dirigía, en el ritual saludo a la nación, una invitación "a los violentos a deponer las armas", en la tarde del último día de 1978, un grupo de guerrilleros del M-19 comenzó a cargar en camiones las 7000 armas almacenadas en el principal arsenal del país. Todos los cálculos de la que a muchos había parecido una operación desatinada, se demostraron exactos. Los guerrilleros aprovecharon los tres días festivos de cierre del arsenal para vaciarlo completamente. Antes de marcharse por el túnel, una vez desocupado el último estante de la armería, un joven guerrillero respondió a la invitación del general Luis Carlos Camacho, escribiendo con mayúsculas en la pared: "... Y lo hicimos".

Tras haber transportado el arsenal a un barracón de la periferia de Bogotá y colocarlo bajo una lona azul, los guerrilleros no tuvieron mucho tiempo para celebrar la operación Ballena Azul, llamada así por la gigantesca dimensión de aquella masa de armas y municiones. Tenían la orden de desaparecer de la ciudad en la mayor brevedad posible. Rafael subió al primer vuelo que salía para Panamá junto con Esther y sus dos hijos. Cuando al día siguiente el hijo más pequeño vio por televisión el reportaje sobre el robo de armas más famoso de la historia contemporánea y reconoció su casa, comprendió inmediatamente la razón del extraño ajeteo de los últimos dos meses. Su única pregunta fue: "¿Esto quiere decir, papito, que nos quedamos sin casa y sin carro?"